

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO:	525
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2022-00375-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ANA SOFÍA CASTRO ACOSTA
DEMANDADAS:	LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VINCULADA:	
ASUNTO:	Resolución excepción previa inepta demanda

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A., en su escrito de contestación de la demanda, formularon la excepción previa de “*Inepta demanda*”, y el Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación propuso la excepción previa de “*Ineptitud sustantiva de la demanda por no dirigirse contra el acto administrativo que decidió de fondo la solicitud*”, las cuáles serán resueltas de conformidad con lo reglado en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos 100 a 102 del CGP.

La primera excepción se funda en que la demanda incurrió en los defectos de indebida acumulación de pretensiones, toda vez que solicitó el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la no consignación de la cesantía y la cancelación de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, y de omitir el concepto de violación de conformidad con el numeral 4 del artículo 162 del CPACA y la correspondiente causal de nulidad, con lo cual desconoció el principio de lealtad procesal.

También indicó que la parte actora no determinó con claridad el acto administrativo demandado ni indicó con exactitud ante quien radicó la petición, omisión que impide ejercer a cabalidad el derecho de defensa, pues se desconoce si la solicitud fue radicada ante el ente territorial, el Ministerio de Educación o el FOMAG.

La segunda excepción se sustenta en que no es viable pretender la nulidad del Oficio No. CUN2021EE019182 del 16 de septiembre de 2021, por el cual le indicó a la peticionaria que el Departamento de Cundinamarca no era el competente para atender la solicitud, pues su deber se limitaba a enviar el reporte de la liquidación de la cesantías de los docentes activos e inactivos y, por ende, no le incumbía definir si era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y los intereses a las cesantías, de manera que al presentarse la demanda contra un oficio que indicó que no podía resolver de fondo, no es posible ejercer control judicial, por no tratarse de un acto definitivo.

Sobre la naturaleza de la excepción de inepta demanda, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, en auto del 29 de septiembre de 2019, Interno No. 4465-17, la explicó en los siguientes términos:

**“Ineptitud sustantiva de la demanda – eventos que la constituyen.**

(...) se deben realizar algunas precisiones preliminares sobre la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda». Al respecto esta subsección ha señalado que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual constituye una imprecisión<sup>1</sup>.

Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto”.

Justamente sobre aquellos requisitos formales a los que hace alusión la jurisprudencia en cita, la misma corporación indicó que éstos corresponden a los señalados en los artículos 162 y 166 del CPACA, inclusive el contenido en el artículo 163 *ibídem*, por lo que el juez de lo contencioso administrativo sólo puede estudiar y declarar probada esta excepción cuando se configure alguno de estos supuestos, pues las demás situaciones que se presenten deben ser examinadas de acuerdo con las otras excepciones previstas en el artículo 100 del CGP (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez, Número Interno 0755-17).

En el *sub júdice* se evidencia que la parte demandante promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó la nulidad del acto administrativo presunto derivado de la petición radicada el 7 de septiembre de 2021, que le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantía consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses sobre las cesantías prevista en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Obsérvese:

*“Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 con radicado No CUN2021ER028969, frente a la petición presentada ante el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN, el día 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021.*

*Declarar que mi representado (a) tiene derecho a que LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN, de manera solidaria, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 y a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991 (...).”*

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2016, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

Nótese, que en ningún aparte del acápite de pretensiones del libelo se deprecó el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, como erráticamente lo adujo la parte demandada, ni es acertado que pregone también que en la demanda no se haya indicado la causal de nulidad y el concepto de violación, pues en el respectivo apartado se invocó como tal el desconocimiento o infracción de las normas en las cuales debió fundarse el acto administrativo acusado, se especificaron los preceptos constitucionales y legales quebrantados y se explicó suficientemente el concepto de la trasgresión.

Frente a la precisión del acto administrativo demandado, es evidente que fue satisfecha tal exigencia, ya que fue debidamente individualizado; cuestión distinta es que haya sido o no acreditado, pues su demostración será objeto del debate probatorio.

Por consiguiente, no son plausibles los argumentos planteados en la excepción previa por parte del Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora S.A, toda vez que lo pretendido es la nulidad de un acto administrativo ficto derivado del silencio de la entidad a quien el ente territorial le reenvió la reclamación administrativa, pues mediante Oficio No. CUN2021EE019182 del 16 de septiembre de 2021 la Secretaría de Educación de Cundinamarca la remitió a la Fiduprevisora S.A. y la parte demandada no acreditó que hubiera expedido y notificado el acto administrativo definitivo que le permitiera a la administrada acudir a la jurisdicción y, en consecuencia, al no existir una respuesta de fondo es dable que la demandante acuda a este medio de control para impugnar el acto presunto negativo.

Así las cosas, se desestimaré el medio exceptivo planteado, en atención a que la parte actora expresó con precisión y claridad las pretensiones de la demanda e individualizó el acto ficto acusado, es decir, aquel mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

Y, en cuanto a la excepción previa de *“Ineptitud sustantiva de la demanda por no dirigirse contra el acto administrativo que decidió de fondo la solicitud”* planteada por el Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación, se concluye que, en efecto, el oficio mediante el cual ese ente territorial reenvió la reclamación administrativa de la actora a la Fiduprevisora S.A. por ser la competente para resolverla de fondo, no constituye un acto administrativo definitivo y, por lo tanto, no es susceptible de control judicial, motivo por el cual la demandante optó por impugnar el acto presunto derivado del silencio de la entidad destinataria, pues ésta no acreditó la emisión y notificación del acto administrativo expreso que haya decidido sus pedimentos, de suerte que no son de recibo los reparos hechos en la referida excepción previa.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DECLARAR infundadas las excepciones previas de *“Inepta demanda”* formulada por La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A, y de *“Ineptitud sustantiva de la demanda por no dirigirse contra el acto administrativo que decidió de fondo la solicitud”* propuesta por el Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación.
2. REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.
3. RECONOCER a la Dra. Catalina Celemin Cardoso, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.453.991 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 201409 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, y a la Dra. Liseth Viviana Guerra González, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.433.345 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 309444 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderadas principal y sustituta de La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora S.A., en los términos y para los fines conferidos en los poderes general y especial y de acuerdo con los anexos obrantes en los archivos *“SUSTITUCIÓN MEN-*

FOMAG-10.pdf”, “ESCRITURA 0129\_DRACATALINA.PDF pdf” y “20PoderFiduprevisora.pdf” del expediente digital.

4. RECONOCER al Dr. John Henry Montiel Bonilla, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.024.823 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 238614 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en el archivo “10PoderDepartamentoCundinamarca.pdf” del expediente digital.

Los memoriales de los apoderados deben ser enviados únicamente al correo electrónico [correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co), los cuales deberán contener los 23 dígitos de proceso, el juzgado al cual se dirige, las partes del proceso y no podrá exceder 5000 KB.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 180-1 y 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co).

NOTIFÍQUESE

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

KPG

Firmado Por:  
Humberto Lopez Narvaez  
Juez  
Juzgado Administrativo  
027  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1efeb2095181a27d91753a3bb9848057ba233f8e595ec69196427f388402f7ef**

Documento generado en 08/08/2023 09:18:50 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**